

Quito, Ecuador

Febrero de 2013

ELECCIONES ECUATORIANAS: LECTURAS Y ESCENARIOS¹

Pablo Ospina Peralta

** Profesor del Área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar; investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos y militante de la Comisión de Vivencia, Fe y Política.*

Los resultados de las recientes elecciones presidenciales realizadas en Ecuador son analizados por Pablo Ospina Peralta quien perfila los escenarios del futuro inmediato para el país, su democracia y la gestión del nuevamente electo presidente Rafael Correa. En el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) estamos siguiendo con mucho interés el devenir del hermano país y seguiremos ofreciendo a las y los lectores otras miradas sobre el proceso, especialmente en lo vinculado al desarrollo rural.

El gobierno de la revolución ciudadana salió victorioso de la última contienda electoral incluso medido bajo parámetros exigentes, como el de superar la votación obtenida en 2009, que fue entonces el 52% de los votos válidos. Con casi el 57% de los votos válidos, se sitúa muy lejos de cualquier competidor. El más cercano, el representante de la derecha política e ideológica, el banquero Guillermo Lasso, del movimiento CREO, está a más de 30% de distancia. Sin duda, la elección fue un gran plebiscito sobre las políticas aplicadas por el gobierno en los últimos seis años y constituye un formidable acto de acumulación de fuerza política que servirá para legitimar las que se apliquen en los siguientes años.

Aunque los resultados definitivos todavía no están disponibles, es posible hacer un balance más fino de la votación comparándola con la elección presidencial inmediatamente anterior. La votación por el Presidente no sólo creció casi 5% en el país sino que, y más importante, hubo un notable cierre de la brecha entre la votación presidencial y la votación para la Asamblea Nacional. Mientras en 2009 la diferencia entre una y otra fue de 9%, en 2013 descendió a sólo 4,5%. De esta manera, la votación por las listas nacionales a la Asamblea Nacional pasó de 43% a 52%. La única provincia en donde esa brecha se agrandó en lugar de disminuir fue Galápagos. Para sorpresa mundial, existen dos provincias orientales, Napo y Morona, donde, según datos definitivos, las listas para asambleístas nacionales obtuvieron ligeramente mayor votación que la lista presidencial (aunque las listas de asambleístas provinciales tuvieron menos votación y quedaron en segundo lugar respectivamente ante Sociedad Patriótica y ante la Coordinadora de Izquierdas). El éxito del gobierno en promover el voto “en plancha”, es decir, por todas las listas del gobierno, fue virtualmente completo.

¹ El artículo fue publicado por el Comité Ecuménico de Proyectos (CEP), bajo el título de: *Lecturas y escenarios de la victoria electoral de Rafael Correa y también puede encontrarse en <http://www.cepecuador.org>*



No tenemos información todavía fidedigna sobre la asignación de escaños en todas las provincias, pero parece que el gobierno podría tener una representación cercana a los 100 electos contra 59 que obtuvo en 2009. Pasó del 47% de la representación parlamentaria al 73%. Evidentemente esta sobre-representación se debió menos al aumento de votación que a la fórmula de asignación introducida mediante veto presidencial a fines del año 2011. Con el sistema de asignación de escaños anterior la representación habría caído entre 70 y 80 asambleístas sobre 137.

Desde un punto de vista regional, la votación gubernamental, igual que en 2009, fue mayor en la Costa y en las provincias serranas de Pichincha y Azuay, donde están las grandes ciudades de Quito y Cuenca, que en la sierra central y sur o en la Amazonía. En 2013 esta tendencia se acentuó notablemente. Hay tres provincias de la Costa donde la votación de Rafael Correa creció enormemente: Guayas, donde pasó del 44% al 63%, Los Ríos, del 53% al 61% y Manabí, del 53% al 63%. Estas tres provincias cuentan por prácticamente todo el aumento de la votación de Alianza País entre 2009 y 2013.

Las pérdidas de votación más significativas ocurrieron en la Amazonía sur, en todas las provincias de la frontera con Perú y en Imbabura, en la sierra norte. Tanto en esta última como en la costeña provincia de El Oro, en la frontera con Perú, la caída es fuerte, más de 10 puntos, pero desde niveles de votación muy altos: de 65 y 67% a 57%. En Loja y Zamora, en la Sierra y Amazonía sur, la caída es incluso más pronunciada: de 61% a 45% y de 46% a 34%. En otras provincias de la Sierra central y la Amazonía, la votación se mantuvo relativamente baja: 33% tanto en Bolívar como en Morona Santiago.

Salvo el caso de Bolívar, es muy difícil no ver en estos datos los ecos del rechazo a la política de promoción de la gran minería en el sur del Ecuador. Se trata, en efecto, de las provincias más afectadas por los grandes proyectos mineros. Las excepciones son la provincia del Azuay y la zona de Intag, en Imbabura, donde a pesar del impulso minero, la votación de Rafael Correa se mantuvo excepcionalmente alta.

En cuanto a las oposiciones de derechas e izquierdas, las recomposiciones fueron más dramáticas. Lo más significativo es la reducción drástica del apoyo a Lucio Gutiérrez y a Álvaro Noboa, que pasaron, respectivamente, de 28% a 6,7% y de 11% a 3,7%. Una gran parte de su antigua votación parece haberse dirigido, más o menos equitativamente, hacia Rafael Correa (sobre todo en las provincias de la Costa) y hacia Guillermo Lasso, el candidato más fuerte de las derechas (sobre todo en las de la Sierra). De hecho, es la primera vez desde la elección de Jaime Roldós Aguilera en 1978, que el candidato de las derechas, el guayaquileño Guillermo Lasso, obtuvo más votos en la Sierra que en la Costa. Esto hace suponer que su candidatura logró acumular una parte de votación “prestada” del electorado regional que tradicionalmente votaba hacia el centro y el centro izquierda.

Esto se explica porque esta primera vuelta del año 2013 funcionó como si fuera la segunda: se concentró la votación anti –gubernamental en la candidatura más fuerte de las derechas, en forma similar a lo que ocurrió con la candidatura de Lucio Gutiérrez en 2009, que también concentró el voto “anti –Correa” en la esperanza de forzar una segunda vuelta. Es imposible prever si este desplazamiento de la votación desde las “derechas populistas” (Gutiérrez Noboa) hacia las derechas ideológicas (Lasso, con 23% y el candidato nuevo, Mauricio Rodas, que consiguió 4% de los votos) será estable o no.

Las oposiciones de izquierdas salieron debilitadas con una votación que no superó lo que Martha Roldós y Diego Delgado obtuvieron en 2009: si sumamos la votación de Alberto Acosta, de la Coordinadora por la Unidad de las Izquierdas (3,3%) y Norman Wray, de Ruptura de los 25 (1,3%), la votación total se mantendría estancada en alrededor del 5%.

Hay que decir que si juzgamos la distribución regional de las votaciones en 2009 y 2013, en realidad no estamos hablando del mismo electorado. De hecho, contra todo pronóstico, Alberto Acosta, una figura bastante conocida y respetada, ex presidente de la Asamblea Constituyente, obtuvo menos votación que sus listas de asambleístas.

En efecto, las listas nacionales y de parlamentarios andinos de la Coordinadora de Izquierdas lograron concentrar lo que podríamos llamar el “voto duro” de las izquierdas históricas (el 5%), las vinculadas a la CONAIE –Pachakutik y al Movimiento Popular Democrático, mientras que Alberto Acosta no logró hacerlo. De esta manera, Pachakutik, el partido ligado a la CONAIE, logró mejorar su votación local en la Sierra central y en la Amazonía, obteniendo al parecer 6 asambleístas, mientras que el MPD parece haberse quedado sin representación aunque al momento de escribir estas líneas todavía se disputa un asambleísta en la provincia costeña de Esmeraldas.

A todas luces, el electorado que hubiera podido votar por Acosta, es decir, una parte del voto “blando” a favor del presidente Rafael Correa y una parte del voto de centro izquierda serrano, o no encontró diferencias significativas con las propuestas del gobierno o prefirió el “voto útil” a favor de la derecha. Esta es la votación que Acosta no pudo convencer en Cuenca y sobre todo en Quito, donde hubiera podido crecer mucho más y donde obtuvo votaciones muy bajas (6% en Azuay y 2,7% en Pichincha).

Escenarios

Un primer paso es hacer el recuento de los cambios en el comportamiento electoral. El segundo es interpretar sus significados y sus efectos sobre las relaciones de poder político en el país.

Lo que se ha producido es una polarización de la representación política formal entre la derecha ideológica, cuyo discurso se centró en la crítica al modelo estatista en economía, prometió rebajas de impuestos y más peso de la inversión y las empresas privadas, y Alianza País, cuya campaña no consistió en prometer algo nuevo sino en reafirmar la obra realizada. Por su parte, el discurso y el perfil político alternativo de izquierda están debilitados y se concentrarán sin duda fuera del sistema político, en los medios disponibles, en las organizaciones sociales y en las protestas callejeras.

La mayor incertidumbre proviene del posible significado de largo plazo de esta “polarización” entre derecha y centro–derecha, representado fundamentalmente por CREO y el centro izquierda, representado por Alianza País. Recordemos que, por primera vez en décadas, esta diferenciación ideológica no aparece claramente atravesada por la fractura regional, es decir, la derecha en la Costa y la centro–izquierda en la Sierra. Lasso ganó ligeramente más votos en la Sierra mientras que Correa ganó muchos más votos en la Costa. ¿Podríamos estar asistiendo al nacimiento de la estabilización soñada hace treinta años por Osvaldo Hurtado de un bipartidismo parecido al que dominó Europa durante la segunda mitad del siglo XX? ¿Un escenario que clausurará los “extremos” y obligará a conformarse con ajustes menores en un sistema globalmente inmodificable? Este es un primer “escenario” posible, aunque tal vez menos probable, en la evolución futura del sistema político ecuatoriano.

Una primera objeción a semejante posibilidad es que los electores no tenían en mente una diferenciación propiamente ideológica al momento de votar y que por lo tanto la volatilidad de sus adhesiones sigue siendo la misma de siempre. Sin embargo, más allá de las adscripciones ideológicas estrictas o conscientes, hay en esos electores una clara diferenciación entre el peso que se le asigna al Estado en la dirección de los problemas económicos y la garantía de derechos sociales. Quienes votaron por Rafael Correa, claramente tenían en mente no solo un gobierno fuerte o una figura carismática sino el crecimiento de la obra pública, la ampliación de la inversión social, especialmente en salud y educación, pero también en atención a discapacitados y extensión de la cobertura de servicios, así como el esfuerzo de tecnificación disciplinaria de la burocracia. La votación por Lasso parece más mezclada: no solamente votaron por él quienes aspiran a un mayor peso del

emprendimiento privado sino también quienes se sentían especialmente molestos por el autoritarismo y la prepotencia gubernamental.

La estabilización de un bipartidismo en el futuro del Ecuador implicaría seguramente algunos desplazamientos análogos a los operados en Europa en su momento: el fortalecimiento de las tendencias más “liberales” dentro del partido de gobierno y la aceptación por parte del centro–derecha que ciertas garantías sociales y un mayor peso del Estado son un mal necesario e inevitable una vez que la población los adopta por costumbre como “derechos adquiridos”.

Algo así se percibió en el discurso de campaña de Guillermo Lasso para quien era muy difícil promover el desmontaje del costoso aparataje de protección social inventado durante los años de gobierno de Alianza País. Por el lado del movimiento político gubernamental, asimismo, es fácil advertir que se debilitan los rezagos “movimientistas” y se afirman progresivamente los grupos más moderados, pragmáticos y menos animados por lo que ellos consideran las “novelerías” garantistas de la Constitución de Montecristi.

Esta podría ser, por ejemplo, la apuesta de ideólogos como Fernando Bustamante, actual asambleísta electo por Alianza País, para quien era necesario un “momento bonapartista”, es decir, de fuerza concentrada y disciplinaria, para salir del Estado “secuestrado” que teníamos y avanzar en la construcción de un Estado típicamente liberal. Es probable que el propio Rafael Correa, inspirado como está en la doctrina social de la iglesia católica, imagine un sistema político de tales características, con el matiz, propio de varios sistemas políticos liberales, de buscar un respeto sacrosanto a la majestad de la autoridad presidencial. En una paradoja no exenta de ironía, Correa podría ser el realizador de los sueños de Hurtado.

Existe, no obstante, un enorme obstáculo a semejantes propósitos. Nos referimos al déficit en la construcción propiamente partidaria de ambos movimientos. Ni CREO ni Alianza País cuentan con una estructura política fundada en la promoción de cuadros y dirigentes ni en la formación política basada en principios ideológicos o en horizontes de construcción del Estado.

El caso de CREO es menos grave porque se trata de un movimiento de tamaño más reducido y menos heterogéneo; mientras que Alianza País está demasiado fundado en la atracción electoral y decisión programática de la figura presidencial, que es lo único que mantiene unido a un movimiento extraordinariamente heterogéneo. Si las tendencias ideológicas que se afirmaron en las elecciones de febrero de 2013 no se estabilizan en estructuras organizativas mínimamente consolidadas, entonces las tradiciones personalistas, fragmentadas y faccionalistas de la política ecuatoriana volverán a dispersar el sistema político apenas terminada la fase de consolidación del “correísmo”.

Un segundo escenario posible, tal vez más probable, es la intensificación de las disputas y debates internos entre distintas facciones dentro de la propia Alianza País. En lugar de “estabilizar” el debate ideológico en dos fuerzas político –electorales distintas, el conflicto se trasladaría al interior de Alianza País, que se convertiría en la única fuerza política dominante. Los sectores empresariales ahora relativamente distantes se verían entonces obligados a un ingreso más orgánico y duradero dentro de las redes de poder del movimiento gubernamental.

Mientras dure el apoyo popular a Rafael Correa, el caudillo podría manejar, a la manera peronista, los antagónicos grupos y tendencias existentes a su interior. Alejado el máximo líder del poder o de la vida pública, el movimiento estallaría en varios pedazos liderados por distintos caudillos, cada uno reclamando la herencia política de las mejores épocas doradas del “correísmo “. Este segundo escenario resulta más compatible con las tradiciones políticas y la débil institucionalización, no solo de los partidos sino de las propias estructuras de encuadramiento político y social de las clases populares, de cuyo apoyo difuso e inestable depende el poder político acumulado por Alianza País.

Seguramente habrá esfuerzos y señales a favor de ambos escenarios. La vida política es difícilmente previsible y la realidad está siempre hecha de combinaciones dispares y resultados contradictorios. Al cúmulo de elementos imprevisibles hay que sumar el contexto internacional y la acumulación de tensiones en el modelo económico (peligroso aumento del déficit en la balanza comercial, alto costo fiscal de las garantías de derechos sociales y la inestabilidad en el precio de las materias primas en el mercado mundial). Este tipo de contradicciones internas del modelo económico podría llevar a radicales y dramáticas transformaciones del escenario político antes de que cuajara cualquiera de los escenarios descritos o de sus combinaciones posibles.

La proposición de escenarios políticos nos ayuda a orientarnos en medio de la confusión pero las bolas de cristal siempre han sido neblinosas. Lo que viene en el futuro inmediato es el período electoral de 2014 para elegir gobiernos locales. Rafael Correa, días después de la elección, anunció un paquete de reformas a la Constitución de Montecristi, donde espera restringir derechos y garantías que siempre consideró “noveleras” o “infantiles”, como la prohibición de la entrada de transgénicos al país y la excesiva facilidad para presentar acciones de protección ante los jueces para asegurar la garantía de derechos frente a las acciones de ciudadanos, de empresas o del Estado (“Segunda reforma a la Constitución”, El Comercio, 21 de febrero de 2013. Consultado en http://www.elcomercio.com/politica/Segunda-reforma-Constitucion-Ecuador-Correa_0_869913084.html).

Da la impresión que el gobierno quiere rayar la cancha para el proceso electoral venidero marcándolo con una consulta popular nacional que le permitiría intervenir con todo su aparato político para moderar el típico localismo de este tipo de elecciones y asegurar una mayoría del oficialismo. Pero al hacerlo de esta manera, atacando los “excesos garantistas” de la Constitución de Montecristi, envía una poderosa señal de alineamiento a su ala izquierda que tendrá en su boca una piedra dura de tragar.

¿Habrá remezón interno como el que produjo la Consulta Popular de mayo de 2011? No parece probable luego de la victoria de febrero que el presidente puede exhibir como un triunfo personal que nadie en su propio movimiento le puede disputar.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.